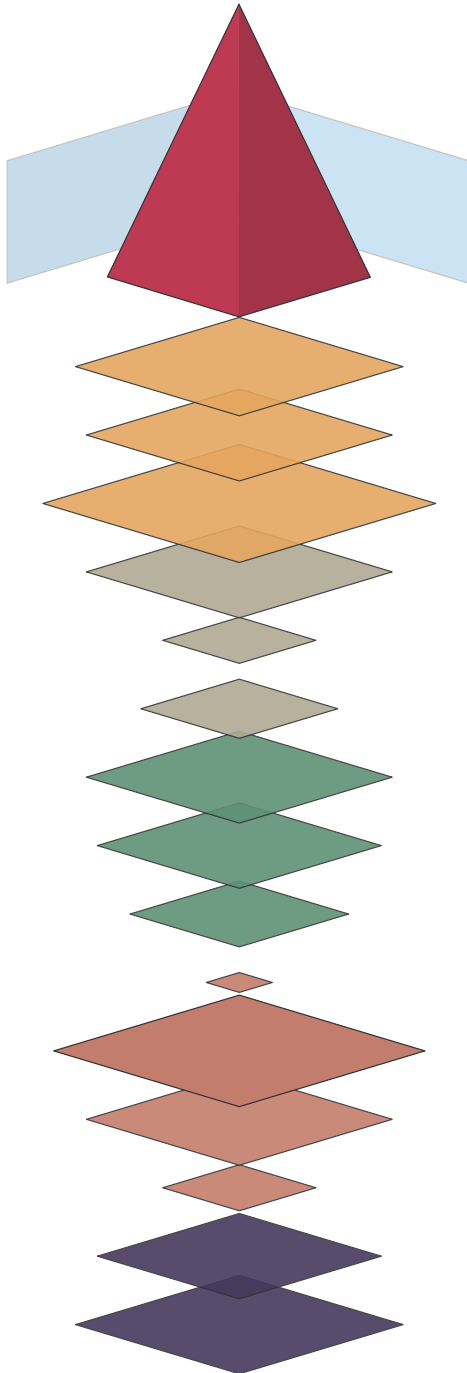


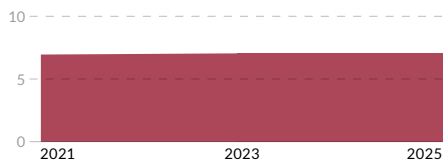
HONDURAS



7.10 $\nearrow 0.05$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

13.º de 193 países -
5.º de 35 países americanos -
2.º de 8 países de América Central -



MERCADOS CRIMINALES 6.10 $\nearrow 0.10$

TRATA DE PERSONAS	7.50 $\nearrow 0.50$
TRÁFICO DE PERSONAS	7.00 $\nearrow 0.50$
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	9.00 $\nearrow 0.50$
TRÁFICO DE ARMAS	7.00 $\nearrow 0.50$
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	3.50 0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4.50 $\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FLORA	7.00 0.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6.50 0.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	5.00 0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	1.50 $\searrow 0.50$
COMERCIO DE COCAÍNA	8.50 0.00
COMERCIO DE CANNABIS	7.00 $\searrow 0.50$
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3.50 0.00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	6.50 0.00
DELITOS FINANCIEROS	7.50 0.00



ACTORES CRIMINALES 8.10 0.00

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	8.50 0.00
REDES CRIMINALES	7.50 0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8.50 0.00
ACTORES EXTRANJEROS	8.00 0.00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	8.00 0.00



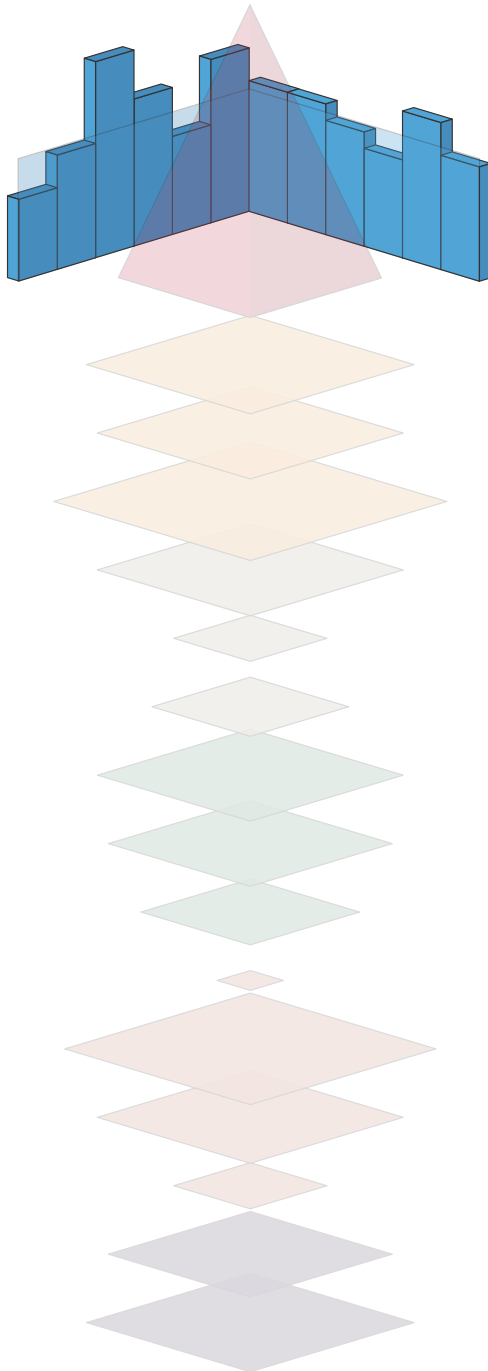
Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

HONDURAS

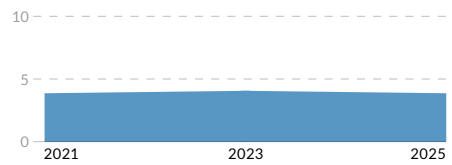


3.92 $\searrow 0.16$ PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

135.º de 193 países $\searrow 8$

28.º de 35 países americanos $\searrow 2$

5.º de 8 países de América Central $\searrow 1$



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	2.50	$\searrow 0.50$
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3.50	0.00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6.00	$\searrow 0.50$
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	4.50	$\nearrow 0.50$
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3.00	$\searrow 0.50$
CUERPOS DE SEGURIDAD	5.00	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4.00	$\searrow 0.50$
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4.00	0.00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	3.50	0.00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3.00	0.00
PREVENCIÓN	4.50	0.00
ACTORES NO ESTATALES	3.50	$\searrow 0.50$



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Honduras es clave como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, con redes bien establecidas que operan tanto a nivel nacional como regional. Los traficantes explotan a las víctimas, en particular mujeres y niñas, mediante trabajos forzados y explotación sexual comercial dentro de Honduras y en el extranjero, especialmente en Belice, El Salvador, Guatemala, México, España y Estados Unidos. Las víctimas extranjeras proceden principalmente de Colombia, Belice, Guatemala y México. En el 2024, la cuestión cobró mayor relevancia a nivel nacional, debido al desmantelamiento de algunas redes de trata y al aumento de las denuncias de desapariciones forzadas de estudiantes, que se sospecha que están relacionadas con la trata. La demanda de víctimas abarca diversos sectores, entre ellos la venta ambulante, la mendicidad forzada, el servicio doméstico y la prostitución. El trabajo forzoso es frecuente en la agricultura, la construcción, la minería, la industria manufacturera y los servicios hospitalarios y afecta de manera desproporcionada a los niños, los grupos indígenas y los afrodescendientes. Los traficantes también intentan infiltrarse cada vez más en el sistema de adopción, donde explotan a los niños vulnerables.

Honduras es un país tanto de origen como de tránsito para el tráfico de personas, lo que facilita el movimiento de migrantes hondureños y extranjeros, procedentes sobre todo de Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador, Colombia, China y Senegal. Las rutas del tráfico se extienden por el norte de América Central, en particular a través de Guatemala y El Salvador, con puntos de entrada claves desde Nicaragua en los departamentos de El Paraíso y Choluteca. Debido al aumento de las sanciones administrativas por migración irregular, los migrantes tratan de eludir los controles oficiales y se han denunciado casos de corrupción en el proceso de expedición de documentos. Los precios aumentan en función de los servicios y llegan a alcanzar los 10 000 dólares estadounidenses.

Honduras tiene uno de los mercados de extorsión más arraigados de América Central, que genera beneficios superiores a los de sus vecinos: Guatemala y El Salvador. Casi todos los sectores de la sociedad se ven afectados y el más vulnerable es el del transporte. Recientemente, por negarse a pagar las extorsiones, varios trabajadores del transporte público han sido asesinados y se han quemado decenas de autobuses. La mayoría de las operaciones de extorsión se coordinan desde las cárceles. Si bien los pagos en efectivo siguen siendo habituales, la extorsión digital está en alza y aumentan las extorsiones mediante transferencias bancarias y monederos electrónicos. Utilizando el método de los préstamos gota a gota, las bandas extorsionan a las

víctimas mediante microcréditos con intereses elevados. La extorsión también ha provocado desplazamientos internos y muchas familias afectadas han tenido que trasladarse.

TRÁFICO

Honduras tiene un mercado de tráfico de armas bien establecido, con armas procedentes principalmente de Estados Unidos. Las autoridades han incautado armas, como rifles AR-15, pistolas de 9 mm y uniformes de la Policía Nacional utilizados en actividades ilícitas. A pesar de la disminución de los homicidios, la mayoría de los asesinatos se han cometido con armas de fuego y de ellos un porcentaje significativo se ha atribuido al crimen organizado. La corrupción dentro del sistema penitenciario facilita el tráfico interno de armas. La condena del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por tráfico de una amplia variedad de armas destaca aún más la magnitud del problema. El impacto de este mercado criminal va más allá de la violencia, ya que perturba gravemente a Honduras, porque degrada las estructuras públicas y la gobernanza.

El mercado de productos falsificados sigue siendo relativamente modesto, pero se está expandiendo. Abundan las falsificaciones de ropa, calzado, cosméticos y productos farmacéuticos. La corrupción debilita los intentos de aplicar la ley, sobre todo en el sector farmacéutico, donde los medicamentos falsificados suponen un riesgo para la salud pública. El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, principalmente cigarrillos y bebidas alcohólicas, es relativamente reducido, pero persistente. Desde el 2023 se ha producido un aumento constante de la demanda local de cigarrillos de contrabando. Los productos entran en Honduras a través de los pasos fronterizos oficiales y de rutas clandestinas, en particular a través de Belice y de Guatemala. China es la principal fuente de cigarrillos ilícitos.

MEDIOAMBIENTE

La tala ilegal está muy extendida y la mayor parte de la producción maderera de Honduras proviene de fuentes ilícitas. Las regiones más afectadas son Olancho, Yolo y Gracias a Dios, donde se extraen y trafican especies de gran valor, como la caoba y el cedro, especialmente hacia China, Hong Kong y Estados Unidos. Otra zona muy afectada es La Mosquitia, una reserva natural vital que también alberga comunidades indígenas. La deforestación está muy relacionada con el tráfico de drogas, ya que las organizaciones criminales despejan el terreno para dedicarlo a la agricultura y a la ganadería, para blanquear sus ganancias. Las plantaciones de aceite de palma se han extendido a zonas protegidas, como el Parque Nacional Blanca Jeanette Kawas, ya que las organizaciones criminales utilizan este sector para el lavado de dinero.

Las diversas especies silvestres de Honduras son blanco de las redes de caza furtiva ilegal y algunas especies, como las iguanas verdes, los guacamayos escarlatas y los ciervos de cola blanca, se trafican para el comercio de mascotas y para la industria turística. Los animales se venden tanto a nivel nacional como internacional a través de rutas establecidas, que incluyen desde la Mosquitia hasta la carretera no reconocida entre Olancho y Gracias a Dios, o se trasladan por el río Patuca hasta Puerto Lempira. Los delincuentes suelen utilizar barcos pesqueros o embarcaciones privadas para transportar estos especímenes a las islas hondureñas, donde se los explota. El país también se enfrenta a un importante mercado de pesca ilegal, que se centra en especies como la langosta, la carne de tiburón y el cangrejo.

Honduras también enfrenta retos relacionados con los delitos contra los recursos no renovables, principalmente el contrabando de combustible y la minería ilegal. Persiste la minería ilegal del oro y lo que se extrae se suele contrabandear al extranjero. Las operaciones de contrabando de combustible, que afectan principalmente a los suministros venezolanos y mexicanos, están controladas por grupos del crimen organizado. Estas actividades reducen los ingresos fiscales del país y perjudican a los trabajadores con licencia.

DROGAS

Honduras no tiene un mercado significativo de heroína y hay pocos indicios de que haya demanda local. Sin embargo, existe preocupación por el posible cultivo en el futuro, dados los recientes descubrimientos de plantaciones de adormidera en Guatemala. El país sigue siendo un lugar de tránsito fundamental para la cocaína y cada vez produce más. La droga entra por vía marítima y aérea, principalmente a través de Limón y La Mosquitia, y después se dirige a Guatemala. El cultivo de coca se ha expandido en las regiones remotas y las disputas entre las organizaciones criminales son cada vez más violentas. Aunque han aumentado las incautaciones, continúa el tráfico a gran escala, a menudo facilitado por la corrupción. La extradición del expresidente Hernández a Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas, es un ejemplo de la implicación del Estado.

El cannabis se cultiva y se consume mucho en Honduras, especialmente en La Mosquitia, Yoro y Colón, donde se registraron incautaciones durante este período. El mercado sigue siendo principalmente interno, aunque ha aparecido una variante cada vez más potente, conocida como cannabis «Crispy».

El consumo de drogas sintéticas está aumentando y en eventos sociales están apareciendo sustancias como la cocaína rosa, el GHB y el fentanilo. El fentanilo se puede adquirir legalmente en entornos médicos, pero se sospecha que se desvía con fines ilícitos. Las autoridades han identificado rutas del tráfico desde el Reino Unido y Colombia hacia Honduras.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los delitos dependientes de la cibernética siguen siendo numerosos y afectan a las empresas y a las instituciones estatales. Según informes recientes, Honduras se enfrenta a un alto riesgo de amenazas a la ciberseguridad. Entre los incidentes más destacados se encuentra el ataque de ransomware del 2024 a la empresa de telecomunicaciones Claro, que afectó a sus operaciones en América Central. Además, debido a la preocupación por el aumento del fraude y por otros riesgos asociados a las transacciones con criptomonedas, se prohibió a las instituciones financieras negociar, invertir, facilitar o tener criptomonedas y activos virtuales relacionados sin autorización previa.

DELITOS FINANCIEROS

Predominan las estafas bancarias y se hacen montones de denuncias diarias de fraude en ciudades como San Pedro Sula. Las organizaciones criminales utilizan «cuentas mulas» para blanquear dinero, mientras que algunas figuras políticas destacadas se han visto implicadas en casos de malversación a gran escala. La corrupción sigue facilitando los delitos financieros, agravados por la débil capacidad de aplicación de la ley.

ACTORES CRIMINALES

En Honduras, los grupos de tipo mafioso ejercen un control significativo de los mercados criminales y se dedican a la extorsión, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el narcotráfico. Los grupos más destacados, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, dominan las actividades ilícitas, que incluyen la trata de personas, el robo y el tráfico de armas. Estos grupos operan dentro de Honduras y extienden su alcance a Guatemala, México y Estados Unidos. A pesar de las medidas represivas del Gobierno, se sigue notando su influencia. La MS-13 y Barrio 18 invierten cada vez más en negocios legítimos, como gasolineras, bares y hoteles, para blanquear las ganancias ilícitas. Su control territorial es evidente en los centros urbanos y ciertos barrios de San Pedro Sula están totalmente dominados por las pandillas. Mantienen bastiones dentro del sistema penitenciario y se dice que la MS-13 controla la prisión nacional de Tamara y negocia acuerdos de reparto de poder en la prisión de máxima seguridad de El Pozo. El sistema penitenciario sigue siendo un centro para coordinar las pandillas, donde los reclusos poseen armas de fuego y llevan a cabo transacciones ilícitas. Aparte de las pandillas urbanas, Honduras alberga influyentes organizaciones de narcotraficantes, profundamente arraigadas en el comercio de la cocaína. Estos grupos colaboran con cárteles internacionales y facilitan el transporte de drogas por América Central. La persistencia de grupos de tipo mafioso pone de relieve las dificultades para dismantelar sus redes, ya que se siguen adaptando e integrando en diversos sectores.

Las redes criminales de Honduras tienen una estructura poco rígida pero muy eficaz y colaboran con actores tanto nacionales como internacionales. Se dedican a la extorsión, el tráfico de drogas, de armas y de personas y el contrabando de combustible. Estas redes se suelen coordinar con el Cártel mexicano de Sinaloa y con otras organizaciones transnacionales. Las redes criminales hondureñas van desde los grupos de extorsión, como Banda Independiente y El Combo Que No Se Deja, hasta las redes de tráfico de drogas, como Los Valle Valle y Los Olanchos. Estas organizaciones gestionan las rutas de cocaína desde La Mosquitia hasta Guatemala y se dedican a los asesinatos por encargo. La adaptabilidad de estas redes les permite aprovechar las debilidades de los cuerpos de seguridad. A pesar de las operaciones específicas, se siguen expandiendo a nuevos territorios y así refuerzan su posición dentro del panorama criminal de Honduras.

En los niveles más bajos, los funcionarios corruptos facilitan el contrabando, los cruces fronterizos ilícitos y la protección de las redes criminales. Las figuras de alto rango, como los alcaldes y los congresistas, desempeñan un papel más directo e influyen en las rutas del narcotráfico y en los planes de extorsión. En el 2024 aparecieron pruebas en vídeo de la reunión de algunos narcotraficantes con un miembro de la familia presidencial, al que supuestamente ofrecían financiación para la campaña a cambio de favores políticos. Este escándalo provocó varias dimisiones, entre ellas la del vicepresidente del Congreso Nacional y la del ministro de Defensa. Los altos niveles de corrupción en el sistema político del país siempre agotan los recursos disponibles y debilitan la confianza del público en las instituciones estatales.

Los grupos delictivos extranjeros tienen una presencia significativa en Honduras, principalmente en el tráfico de drogas y el de personas. Los cárteles colombianos y mexicanos desempeñan un papel dominante y colaboran con los actores locales para facilitar el tráfico de cocaína y

el de armas. Aunque su participación en el contrabando de combustibles es mínima, mantienen una fuerte influencia sobre las rutas transnacionales de tráfico. En las redes de trata de personas participan actores de Honduras, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, que forman un complejo sistema transnacional. Estas redes se coordinan con organizaciones criminales de Panamá y de El Salvador para traficar con personas procedentes de Asia y Europa hacia América del Norte. Los actores extranjeros contribuyen a consolidar a Honduras como un importante centro de tránsito y refuerzan su papel en el crimen organizado mundial.

Las instituciones financieras hondureñas, como los bancos, las compañías de seguros y los servicios de envío de remesas, podrían facilitar el lavado de dinero, debido a la ineficiencia de los mecanismos de supervisión. Los grupos delictivos, en particular la MS-13, manipulan las cuentas bancarias de las empresas para legitimar las ganancias ilícitas. A menudo se aprovecha el sector turístico, incluidos hoteles y bares, para lavar las ganancias procedentes del narcotráfico, mientras que las gasolineras se utilizan para brindar apoyo, tanto financiero como logístico, a las empresas delictivas. El crimen organizado también se ha infiltrado en el sector del transporte y coacciona a los comerciantes y a los transportistas para que participen en actividades financieras ilícitas. La MS-13 utiliza santuarios financieros, como El Ocotillo y Colonia San José V, para transferir activos a paraísos fiscales, lo que complica aún más la aplicación de la ley. Aunque no hay pruebas de que los actores del sector privado estén desempeñando un papel cada vez más importante en los mercados criminales, la corrupción persistente en el sector financiero y en el empresarial mantiene el crimen organizado. El afianzamiento de los actores del sector privado pone de relieve el reto que supone la lucha contra la delincuencia financiera y permite que el crimen organizado siga explotando las vulnerabilidades del entorno financiero y empresarial del país.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

La dirigencia política de Honduras ha experimentado cambios significativos, especialmente bajo la presidencia de Xiomara Castro, que en un principio se comprometió a llevar a cabo reformas institucionales que dieran prioridad a los derechos humanos y a la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, desde entonces, el enfoque del Gobierno ha cambiado y se ha hecho hincapié en medidas de seguridad militarizadas, como la suspensión de los derechos constitucionales en virtud del estado de emergencia. Estas políticas no han logrado reducir demasiado la violencia relacionada con las pandillas y así lo demuestra el aumento de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los miembros de las pandillas. La

administración se ha distanciado cada vez más de la sociedad civil, el sector privado y los socios internacionales y no se han llegado a hacer grandes esfuerzos políticos contra el crimen organizado. Además, la injerencia política en las instituciones de seguridad ha debilitado la gobernanza, agravada por los escándalos que involucran a altos funcionarios vinculados a actividades relacionadas con las drogas. La estrategia de mano dura del Gobierno hondureño contra la delincuencia, aunque amplia, ha sido criticada, porque no aborda las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la corrupción. A pesar de estos retos, persiste la voluntad política de reforma, aunque limitada por unos intereses consolidados y por las debilidades institucionales.

La corrupción está profundamente arraigada en la estructura de gobernanza de Honduras, lo que socava mucho la transparencia y la rendición de cuentas. El controvertido nombramiento del fiscal general, empañado por irregularidades procesales, refleja una preocupación más amplia por la politización de las instituciones judiciales y las de supervisión. La corrupción se percibe como un fenómeno generalizado en Honduras, lo que agrava la desconfianza de la ciudadanía en las élites políticas. Las iniciativas anticorrupción anteriores, incluida la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, se enfrentaron a obstáculos políticos y acabaron disolviéndose. Aunque la actual administración se comprometió a establecer una comisión internacional contra la corrupción, la resistencia política y la inacción legislativa han frenado los avances. El nepotismo sigue siendo frecuente y hay personas vinculadas al Gobierno que están implicadas en el tráfico de influencias y el abuso de poder. Además, la infrautilización de los fondos asignados a la lucha contra la extorsión indica ineficiencias en los mecanismos de supervisión financiera. La transparencia de la gobernanza se ve aún más limitada por la ineficaz aplicación de las leyes sobre el derecho a la información, que carecen de mecanismos de aplicación eficaces y de disposiciones sobre la rendición pública de cuentas.

Honduras ha participado en varias iniciativas internacionales contra el crimen organizado y ha firmado numerosos convenios de Naciones Unidas sobre la trata de personas, la fiscalización de las drogas y el contrabando de armas. Sin embargo, el cumplimiento de estos compromisos ha sido irregular. Se produjo un cambio significativo en el 2024, cuando el Gobierno hondureño revocó su tratado de extradición con Estados Unidos, alegando su preocupación por la soberanía nacional. Esta decisión debilita una herramienta fundamental para luchar contra el tráfico transnacional de drogas. Las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado aún más, debido a tensiones diplomáticas, cuando las autoridades hondureñas atacaron a los diplomáticos estadounidenses en sus campañas mediáticas. Por el contrario, Honduras ha reforzado sus lazos con Venezuela, lo que indica un cambio en sus alianzas internacionales. A pesar de estos retos, el país sigue participando activamente en las iniciativas regionales para luchar contra la delincuencia, como los acuerdos de intercambio de información con Guatemala y El Salvador.

Honduras ha establecido marcos legislativos para combatir el crimen organizado, que incluyen leyes sobre el tráfico de drogas y el de personas, el lavado de dinero y los delitos ambientales. Sin embargo, la debilidad de los mecanismos de aplicación de la ley y la corrupción sistémica reducen su eficacia. Las recientes reformas destinadas a reforzar el control de armas y la gobernanza forestal demuestran la intención del Gobierno de abordar las preocupaciones en materia de seguridad y medio ambiente, aunque su aplicación sigue siendo desigual. La legislación sobre ciberdelincuencia sigue estando poco desarrollada y aparecen lagunas en la protección de datos y en la capacidad de investigación de los delitos digitales. A pesar de que ha habido avances legislativos

en ciertos ámbitos, la aplicación de la ley sigue siendo un reto fundamental, debido a la limitada capacidad institucional y a la corrupción dentro de los organismos reguladores.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial hondureño sigue luchando contra la ineficiencia, la injerencia política y la escasez de recursos. Si bien han aumentado las condenas en los casos de trata de personas, la impunidad sigue prevaleciendo en otros sectores delictivos, como el tráfico de armas. Los nombramientos judiciales han sido criticados por su falta de transparencia, lo que ha debilitado aún más la confianza en el sistema jurídico. El sistema penitenciario se encuentra en crisis, hay disturbios a menudo y las pandillas predominan en los centros de detención. En el 2023, una masacre de gran repercusión mediática puso de relieve la vulnerabilidad de la población reclusa, en particular de las mujeres. La respuesta del Gobierno incluyó la remilitarización de la administración penitenciaria, lo que refleja que la gobernanza depende más de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas medidas no han abordado las deficiencias estructurales del sistema penal. Los cuerpos de seguridad de Honduras cuentan con unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, pero la escasez de recursos y la corrupción interna reducen su eficacia. La disolución de la fuerza contra las pandillas y su sustitución por una nueva unidad policial no han aportado mejoras significativas y se han denunciado casos de falta de ética profesional de los agentes. A pesar de las medidas enérgicas contra la extorsión, los índices de criminalidad siguen siendo elevados y muchas detenciones no acaban en condenas. La confianza de la población en los cuerpos de seguridad es escasa y los enfoques policiales militarizados han suscitado preocupación por los derechos humanos. Las iniciativas de interceptación de drogas han dado lugar a importantes incautaciones, pero el tráfico en general sigue siendo intenso, debido a la persistencia de la demanda y a la corrupción que impera en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Que Honduras esté situada a lo largo de las principales rutas del tráfico de drogas y de personas agrava los retos en materia de seguridad fronteriza. Las regiones remotas siguen quedando fuera del control efectivo del Estado, lo que facilita la actividad delictiva.

La frontera entre Honduras y Guatemala es especialmente vulnerable a los cruces ilegales, mientras que los conflictos internos por los derechos sobre la tierra contribuyen a la violencia localizada. Los recursos estatales para aplicar la ley en el territorio son limitados y la corrupción suele debilitar los intentos de garantizar la seguridad fronteriza.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Honduras enfrenta retos importantes en la lucha contra el lavado de dinero, debido a la escasa coordinación entre los organismos, la formación inadecuada y la insuficiente digitalización de la supervisión financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera carece de transparencia y de capacidad

analítica, lo que reduce su eficacia. A pesar de estas deficiencias, Honduras sigue cooperando con Estados Unidos en la investigación de los delitos financieros. La derogación de una ley del 2021 que había debilitado las investigaciones sobre el lavado de dinero supone un avance positivo. Sin embargo, la expansión de los mercados de las drogas sintéticas ha agravado los riesgos del lavado de dinero, ya que los ingresos ilícitos fluyen cada vez más a través de canales financieros informales.

La corrupción y la ineficiencia siguen poniendo el peligro el marco regulador económico de Honduras. La economía informal del país facilita los delitos financieros y el Estado tiene poca capacidad para supervisar los flujos monetarios. Debido a la deficiente aplicación de la normativa financiera, las organizaciones criminales aprovechan las lagunas de los mecanismos de supervisión. A pesar del moderado crecimiento económico, persisten la desigualdad de los ingresos y la pobreza. Las reformas fiscales propuestas para mejorar la supervisión reguladora siguen estancadas en la legislatura. Las cuestiones medioambientales, en particular la tala ilegal y la minería no regulada, plantean más retos normativos.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Las iniciativas para apoyar a las víctimas de delitos han sido inconsistentes y los recursos asignados a los programas de protección son insuficientes. Los refugios para los supervivientes de la trata de personas operan con una capacidad limitada y las víctimas masculinas reciben poco apoyo institucional. La falta de instalaciones especializadas para las víctimas de la trata dificulta aún más los esfuerzos de reinserción. Los programas oficiales de protección de testigos siguen siendo mínimos y solo cuentan con medidas básicas para garantizar el anonimato en los procedimientos judiciales. Fuera de los tribunales, casi no existen mecanismos de protección a largo plazo, con lo cual las víctimas son vulnerables a las represalias.

Honduras ha puesto en marcha diversas campañas de prevención contra la trata de personas y la falsificación, pero su impacto sigue siendo limitado. Las iniciativas de sensibilización pública han aumentado, pero la participación de los cuerpos de seguridad en las estrategias de prevención del delito es escasa. Aunque los esfuerzos para rastrear las exportaciones de madera y para luchar contra la falsificación de medicamentos son prometedores, las barreras sistémicas impiden que se logren avances sustanciales. Los retos sociales más amplios, como el alto nivel de pobreza y de desempleo, favorecen la persistencia de los mercados criminales. A pesar de que hay programas de prevención específicos, en general no se abordan las condiciones estructurales que sustentan el crimen organizado.

Honduras cuenta con un sector de la sociedad civil muy activo, pero el espacio cívico sigue siendo limitado. Los activistas medioambientales y los periodistas se enfrentan a altos niveles de violencia y acoso y la propiedad de los medios de comunicación se concentra en manos de las élites políticas y las empresariales. La libertad de expresión está restringida, especialmente para quienes informan sobre la corrupción o el crimen organizado. A pesar de las dificultades, las organizaciones de la sociedad civil siguen abogando por introducir reformas políticas y por proteger los derechos humanos. Sin embargo, el sector está tan fragmentado y polarizado que su impacto colectivo es limitado. Según las organizaciones internacionales de vigilancia, Honduras es un país con un espacio cívico restringido, lo que refleja las constantes limitaciones de las libertades civiles.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.